


RV: C35360 RV: J 1 ADM. CALI-2021-29, CONTESTACION DESAJ. DTE. YEISON ANDRÉS HINCAPIÉ NOGUERA Y OTROS.

Andrés Mauricio Paque Cárdenas <apaquec@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 24/06/2021 4:24 PM

Para: Juzgado 01 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali <adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Tecnico Sistemas Oficina Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <tecofadmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Apoyo Legal 04 - Cali <galdesajvalle4@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 3 archivos adjuntos (1 MB)

J 1 CALI-2021-29 CONTESTACIÓN DESAJ-YEISON ANDRÈS HINCAPIÉ NOGUERA RAD. 24-06-21_compressed (1).pdf; ANEXO 2-ANEXOS DE PODER Dra. Clara Ines Ramirez Sierra_compressed.pdf; PODER J 1 -2021-29- YEISON ANDRES HINCAPIE Y OTROS.pdf;

Cordial saludo,

Anexo constancia de radicación de documento allegado de manera digital.

Por favor no responda a este correo, este email solamente es para dar respuesta a radicación de correspondencia. Comuníquese con nosotros al email of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

No. Proceso: 76001 - 33 - 33 - 001 - 2021 - 00029 - 00 [Buscar Proceso](#)

> CALI (VALLE) > Juzgado Administrativo > Administrativo Oralidad

Información Principal | Sujetos | Secretaría | Despacho | Finalización

Demandante: YEISON ANDRES HINCAPIE NOGUERA Y OTR Cédula: 1143865880

Demandado: NACION-RAMA JUDICIAL-FISCALIA GRAL DE L Cédula: AS00004

Area: 0001 > Administrativo

Tipo de Proceso: 0001 > Ordinario Fecha: 09/02/2021

Clase de Proceso: 0003 > ACCION DE REPARACION Ubicación: Correspondencia OF AM

Subclase: 0000 > Sin Subclase de Proceso En: 0001 > Primera Instancia

Tipo de Recurso: 0000 > Sin Tipo de Proceso No Ver Proceso: ☐ [Blanquear todo](#)

Despacho: 01-JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI

Actuación Desarrollo

Actuación a Registrar: 24/06/2021 Registrado en:

Correspondencia Of Apoyo Folios:

Fecha Actuación: 24/06/2021 (dd/mm/aaaa) Cuadernos:

Término: ☒ Sin Término ☐ Término Legal ☐ Término Judicial

Calendario: ☐ Ordinario ☐ Judicial

☐ Tiene Término

Días:

Inicial: (dd/mm/aaaa) Final: (dd/mm/aaaa)

Anotación:

C35360- jueves, 24 de junio de 2021 15:55-CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.-3
ARCHIVOS-NANCY MAGALI MORENO CABEZAS-AMP

Ubicación: 0046 > Correspondencia OF AM [Aceptar](#) [Cerrar](#)

Atentamente,

ANDRES MAURICIO PAQUE CARDENAS

Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 24 de junio de 2021 15:58

Para: Andrés Mauricio Paque Cárdenas <apaquec@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: C35360 RV: J 1 ADM. CALI-2021-29, CONTESTACION DESAJ. DTE. YEISON ANDRÉS HINCAPIÉ NOGUERA Y OTROS.

DHORA STELLA RAMÍREZ

Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca

cid:image001.png@01D38AB8.5F7EFE10

De: Apoyo Legal 04 - Cali <galdesajvalle4@cendoj.ramajudicial.gov.co>**Enviado:** jueves, 24 de junio de 2021 15:55**Para:** Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>**Cc:** harvyminav@gmail.com <harvyminav@gmail.com>**Asunto:** J 1 ADM. CALI-2021-29, CONTESTACION DESAJ. DTE. YEISON ANDRÉS HINCAPIÉ NOGUERA Y OTROS.

Señores

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI.

APODERADO.

Cordial saludo.

Me permito radicar la contestación de la demanda RAMA-DESAJ, poder y anexos dentro del proceso 76001-3333-001-2021-00029-00 propuesto por YEISON ANDRÉS HINCAPIE NOGUERA.

Att,

NANCY MAGALI MORENO CABEZAS.

Abogada.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Señores
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO.
Cali – Valle del Cauca

Radicación: 76001-3333-001-2021-00029-00
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Demandada: Nación – Rama Judicial – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTRA.
Demandante: YEISON ANDRÉS HINCAPIÉ NOGUERA.

NANCY MAGALI MORENO CABEZAS, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la C.C. No. 34.569.793 expedida en Popayán – Cauca, portadora de la Tarjeta Profesional No 213.094 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al poder anexo, otorgado por la Doctora **CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA**, quien actúa conforme a lo dispuesto en el artículo 103 numero 7° de la Ley 270 de 1996, nombrada mediante resolución No 1357 del 01 de febrero de 2007 por el Director Ejecutivo de Administración Judicial con fundamento en el artículo 99 Numeral 8° Ley 270 de 1996 y estando dentro de la oportunidad legal procedo a presentar **LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.**

A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por cuanto en el proceso penal no hubo privación injusta de la libertad, ya que las actuaciones de los funcionarios judiciales estuvieron soportadas en las normas sustantivas y procesales vigentes, a su vez, es preciso tener en cuenta que de la demanda y sus anexos no se logra acreditar que el daño alegado por la parte actora sea atribuible a mi mandante y no se prueba que el mismo sea antijurídico en relación las actuaciones que realizaron los juzgadores de la Nación – Rama judicial DESAJ, en el curso del proceso penal.

En lo atinente a la pretensión de Lucro cesante: Es preciso señalar que el mismo debe estar plenamente acreditado y sobre ello me referiré en etapa posterior.

En lo atinente al daño emergente, igualmente requiere prueba pertinente, conducente, legal y oportunamente allegada al proceso.

Se solicitan sumas dinerarias cuya prueba no se ha acreditado su causación tal y como se pretende en relación con el pago del 40% del valor de las pretensiones de la presente demanda.

A LOS HECHOS

Con relación a los hechos presentados en la demanda incoada por el señor YEISON ANDRÉS HINCAPIÉ NOGUERA y su grupo familiar, la Nación Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, se opone a todos y cada uno de los que se contrapongan a los intereses de mi mandante y que no tengan sustento probatorio legal y allegado de manera oportuna al proceso.

RAZONES DE LA DEFENSA

La vinculación al proceso penal del demandante, obedece a una investigación iniciada por la Fiscalía General de la Nación, obedeciendo al actuar delictivo de “*HOMICIDIO*”



AGRAVADO EN CONCURSO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS O PARTES O MUNICIONES”, debiendo por su actuar, soportar la carga de la imposición de la medida y las posteriores consecuencias.

Al haberse tramitado el asunto bajo el Sistema Procesal Penal de la Ley 906 de 2004, le correspondía a la Fiscalía General de la Nación, la carga impulsiva de la acción penal, contrario a lo dispuesto en vigencia de la Ley 600 de 2000, donde la Fiscalía tenía el impulso de la actuación, solo en la etapa investigativa.

Como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Sentencia del 13 de julio de 2006, bajo el radicado N° 15843:

“No ha de olvidarse que si bien –en todo caso- el titular de la acción penal es el Estado, en vigencia tanto del Decreto 2700/91 (art. 24) como de la Ley 600/00 (art. 26) era la Fiscalía en la etapa de investigación y a los jueces en la de la causa, a quienes competía el impulso o el ejercicio de la misma, a diferencia de lo previsto en la Ley 906/04 (art. 66) que le atribuye exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación la carga del impulso de la acción penal”.

También dijo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sentencia del 8 de octubre de 2008, bajo el radicado N° 28361:

“... en aplicación de la ley 906/04 cuando el fiscal abandona su rol de acusador para demandar absolución si puede entenderse tal actitud como un verdadero retiro de los cargos, como que al fin y al cabo es el titular de la acción penal, siendo ello tan cierto que el juez en ningún caso puede condenar por delitos por los que no se haya solicitado condena por el fiscal...”

Es por ello que, la carga de la prueba está en cabeza del Estado a través de la Fiscalía General de la Nación y sus delegados.

- EXCEPCIÓN AL RÉGIMEN DE IMPUTACIÓN OBJETIVA, de conformidad con lo señalado en sentencia proferida el 10 de agosto de 2015, Consejero Ponente Doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa Radicación 54001233100020000183401(30134) Sección Tercera del Consejo de Estado. Según la cual cuando la absolución se genera por falencias y/o deficiencias en la etapa instructiva o por cualquier causal distinta a las señaladas en el artículo 414 del decreto 2700 del 91 o la sentencia in dubio pro reo, debe operar el régimen subjetivo de responsabilidad el cual traslada al demandante la carga de la prueba de la falla del servicio. Y en el traslado de la demanda se es enfatice en señalar como la detención como la acusación obedecieron a la señalización y teoría del caso presentada por la Fiscalía General de la Nación.

En el proceso penal:

EL HECHO DELICTIVO EXISTIÓ, No se presenta privación injusta de la libertad, toda vez que la imposición de la medida se ajustó sustantiva y procedimentalmente a criterios de proporcionalidad y necesidad. Por cuanto el hecho si existió, y al momento de la legalización de la captura se contaban con los indicios suficientes de estar comprometido en el delito por el cual fue acusado el hoy demandante y directo afectado.



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

- Que dada la gravedad de delito y los indicios, el juez de control de garantías sustentó en debida forma la imposición de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía art. 308, 310, 310, 313 Num 1º y 2º del CPC.

FALENCIAS DEL ENTE INSTRUCTOR QUE NO PUEDEN SER CARGADAS A LA RAMA JUDICIAL E INDUCCION AL ERROR AL JUEZ DE GARANTIAS.

- En este contexto, se presenta ausencia de nexo causal, pues no hay lugar a discusión conforme a la redacción del artículo 332 numeral 6, ya que la facultad para pedir la preclusión de la investigación, está deferida por ley, de manera exclusiva y excluyente, a la Fiscalía (la norma reza: “El fiscal solicitará la preclusión”); motivo por el cual, no podía iniciarse, ni mantenerse una investigación sobre la cual, no existían elementos materiales de prueba que comprometieran la responsabilidad del imputado; por ausencia de mérito para sostener una acusación, siendo así no existe responsabilidad de mi defendida y deberá declararse la Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva y eximir de toda responsabilidad a la entidad que represento.
- Que la Ley 906 de 2004 sistema penal acusatorio, impuso a la Fiscalía como ente instructor la obligación de ejercer la acción penal art. 66, 104 CPP, realizando la investigación de los hechos y si es del caso acusar a los presuntos infractores. Siendo así, en el presente asunto el actor fue llevado a juicio por los delitos que la fiscalía le imputo y fue la misma fiscalía la que no tuvo pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia que cobija al DEMANDANTE Y DIRECTO AFECTADO; **falencia del ente instructor que no pueden ser atribuidas a mi representada, Nación – Rama Judicial cuando las actuaciones del Juez de Control de Garantías y del Juez de Conocimiento fueron conforme a derecho y no solo ello, sino que las mismas no tienen la connotación de ser antijurídicas.**
- Su señoría conforme al inciso final del art. 140 CPACA, se debe revisar la intervención de las entidades demandadas en la producción del daño reclamado y no favorecer el injusto con sentencias solidarias, más cuando en el presente asunto la actividad de la fiscalía fue determinante para la imposición de la medida de aseguramiento y la prolongación de la detención; ya que es a la Fiscalía a la que le corresponde detectar, proteger e identificar los elementos físicos de las evidencias y conseguir información general sobre un hecho delictivo o en general diseñar el programa metodológico de la investigación con el propósito de inferir que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga y proceder a formular una imputación ante el juez de control de garantías (art. 286).

En ese momento, la Fiscalía debe describir al imputado, dar su nombre y/o número de identificación y condiciones civiles como profesión, estado civil, nombre de los padres, ciudad donde es oriundo y demás, para identificarlo plenamente. Así mismo, relatar claramente los hechos y solicitar la medida de aseguramiento que le corresponde imponer al juez de control de garantías, como lo señala el artículo 306 de la Ley 906 de 2.004.

Posteriormente, la Fiscalía puede formular la acusación o preclusión de la investigación, decisión que es adoptada por el juez de conocimiento –art. 331 Ley 906 de 2.004-; es decir, el juez es el destinatario de toda la actividad probatoria y adopta las decisiones relacionadas con la privación de la libertad y absolución o condena a los procesados.

Por lo tanto, el Fiscal dirige, coordina, controla y ejerce verificación técnico científica sobre la investigación y las actividades de policía judicial; sin embargo, no tiene la facultad de privar de la libertad a las personas, salvo las excepciones contempladas en la ley (artículo 300), pues dicha función le corresponde al Juez de Control de



Garantías por solicitud del Fiscal, como se establece en su artículo 297 y siguientes, y por tal en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, Ley 906 de 2.004, las decisiones que impliquen la privación de la libertad de una persona, únicamente corresponde adoptarlas a los jueces en función de control de garantías, ya sea al legalizar una captura cuando ésta ha sido efectuada por otra autoridad, incluso en aquellos eventos en que el Fiscal hace uso de la facultad excepcional conferida en el artículo 300, o al ordenar la imposición de una medida de aseguramiento.

ES PRECISO ADVERTIR, QUE A PESAR DE NO TENER LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, BAJO EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, LA FACULTAD DE DECIDIR SOBRE LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD DE UNA PERSONA IMPLICADA EN UN PROCESO PENAL, ÉSTA ENTIDAD PUEDE EN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD EXCEPCIONAL ANTES REFERIDA (ART. 300 C.P.P.), O EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO ENTE INSTRUCTOR, ENCAMINAR LA DECISIÓN QUE PUEDA ADOPTAR EL JUEZ EN RELACIÓN CON LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE UN SINDICADO, Y POR TAL, EVENTUALMENTE, PUEDE INCLUSO LLEVAR O INDUCIR A ERROR AL JUEZ, POR ELLO SIEMPRE SERÁ NECESARIO VERIFICAR EN CADA CASO A QUIÉN LE RESULTA ATRIBUIBLE EL DAÑO ALEGADO.

- **IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTO JURISPRUDENCIAL QUE DEFINE LA ESTRUCTURA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA**, y plantea la **EXCEPCIÓN** del régimen de responsabilidad objetiva cuando se evidencia a que han habido falencias en la investigación constitutivas de falla de servicio y que para el caso concreto, no provienen de mi representada.

En efecto, respecto de la Rama Judicial, debe analizarse su intervención solo a la luz del régimen subjetivo de responsabilidad, invirtiendo la carga de la prueba, debiendo el demandante demostrar la falla del servicio, lo anterior a raíz de que esta evidenciado como se presentan falencias y vacíos en desarrollo de la etapa investigativa.

“Finalmente, si frente a las deficiencias en el recaudo y valoración probatoria de la decisión de preclusión de la investigación, la medida de aseguramiento fue proporcional en estricto sentido “como quiera que no tiene la entidad para anular por sí misma la presunción de inocencia ni la libertad de locomoción reconocidas en la Constitución y en los diferentes instrumentos internacionales ya reseñados, pues además de que se trata de derechos que no tienen un carácter absoluto, su restricción atende el imperativo deseo de conservar las condiciones para garantizar la efectividad del proceso penal, adoptando medidas de reacción rápidas y urgentes, para precaver que los responsables de comportamientos desviados no cumplan la sanción”¹. Cuando se trata de ilícitos como el relacionado con el procesamiento de sustancias estupefacientes, la medida de aseguramiento dictada en el proceso objeto de consideración cumplió con la proporcionalidad en sentido estricto al limitar el derecho a la libertad personal con base en el principio de seguridad ciudadana que para los delitos de este tipo procuran su persecución y prevención, tanto para asegurar la comparecencia, como para permitir que el valor convencional y constitucional de la justicia operara. Dicha proporcionalidad encuentra sustento, también, al aplicar el sub-principio de razonabilidad, ya que tratándose de la investigación penal de un ilícito penal complejo, como el procesamiento de sustancias estupefacientes, se revela en la propia decisión de la Fiscalía que revocó la Resolución de Acusación que le llevó a conclusiones sujetas a deficiencias en el recaudo y valoración probatoria, concluyendo a partir de suposiciones y no de certezas jurídico probatorias en aspectos relacionados con la participación de RODRIGUEZ CHARRY, lo que no pone en cuestión que la decisión de haberle impuesto la medida de aseguramiento se correspondió con un

¹ Corte Constitucional, sentencia C-695 de 2013.



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

ejercicio de justicia material, en el marco de su aplicación excepcional, y sin que se entendiera con un carácter sancionatorio o de condena.

En conclusión, para la Sala, pese a que el daño antijurídico se estableció, se demostró que no es imputable a la entidad demandada, ya que la preclusión de la investigación fundada en el in dubio pro reo se sustentó en una seria deficiencia probatoria que no puede soslayar, ni omitir en su valoración, raciocinio y justificación el juez administrativo, en aras de la justicia material, y que permite la aplicación concreta de la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera de 17 de octubre de 2013. Se trata, sin duda alguna, de afirmar el sentido original del mencionado de fallo de unificación, que si bien contempla una regla general que proscribe el juzgamiento en detención como principio, y enaltece el mismo en libertad como valor sustancial, convencional y constitucional, el fin de lograr la justicia material, como valor convencional y constitucional, permite este tipo de justificaciones excepcionales².

OTROS ASPECTOS RELEVANTES:

- Consideramos que el Juez Administrativo, debe revisar las razones legales probatorias y las circunstancias del caso en concreto que sustentan la imposición de la medida de aseguramiento por parte del juez de Control de Garantías y que esa sola circunstancia no es motivo suficiente endilgar responsabilidad total o parcial a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DESAJ, que, de ser así, generaría la exigencia al juez de control de garantías que obre por fuera del mandato constitucional y legal, es decir, que incurra a su vez en prevaricato por acción aunado al hecho de desconocer el **principio de equilibrio de Igualdad de Armas** del sistema Penal acusatorio, pretendiendo su intervención con herramientas procesales que no existen al interior del procedimiento penal.

El principio de igualdad de armas constituye un elemento esencial de la garantía del derecho de defensa, de contradicción, y más ampliamente del principio de juicio justo, y hace relación a un mandato según el cual, cada parte del proceso penal debe poder presentar su caso bajo unas condiciones y garantías judiciales, que permitan equilibrar los medios y posibilidades de actuación procesal, dentro de las cuales se presente como esencial las facultades en cuanto al material probatorio a recabar, de tal manera que no se genere una posición sustancialmente desventajosa de una de las partes frente a la otra parte procesal, como la que de hecho se presenta entre el ente acusador y el acusado, a favor del primero y detrimento del segundo. El principio de igualdad de armas o igualdad de medios, supone entonces que la carga probatoria del acusador es proporcional a sus medios y que las reglas de ejercicio del principio contradictorio en virtud de esa carga, buscan equiparar la participación en el proceso penal, tanto optimizando lo más posible las garantías de la defensa, como incrementando la exigencia del cumplimiento de la labor probatoria del acusador. Para esta Corte el derecho de defensa en materia penal encuentra uno de sus más importantes y esenciales expresiones en el principio de igualdad de armas, en procura de garantizar la protección de los imputados frente a aquellas situaciones que desequilibran su actuación en el proceso.

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS-Concepto/**PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS**-Aplicación en prohibición pruebas de oficio/**PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS**-Núcleo esencial del derecho al debido proceso e igualdad en el acceso a la justicia.

La pasividad judicial en materia probatoria favorece la igualdad de trato jurídico entre los sujetos procesales y, en especial, lo que la doctrina especializada ha denominado la

² **CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA;** Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil quince (2015); **Radicación:** 54001 23 31 000 2000 01834 01(30134).; **Actor:** Edgar Rodríguez Charry y Aminta Charry **Demandado:** Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación; **Asunto:** Acción de reparación directa (Sentencia)

igualdad de armas en el proceso penal. Dicho de otro modo, la prohibición demandada tiene por objeto evitar situaciones de privilegio o de supremacía de una de las partes, de tal suerte que se garantice la igualdad de posibilidades y cargas entre las partes en las actuaciones penales cuya característica principal es la existencia de contradicción. En efecto, la aplicación del principio de igualdad de armas en el proceso penal hace parte del núcleo esencial de los derechos al debido proceso y de igualdad de trato jurídico para acceder a la justicia (artículos 29, 13 y 229 de la Constitución), según el cual las partes deben contar con medios procesales homogéneos de acusación y defensa, de tal manera que se impida el desequilibrio entre las partes y, por el contrario, se garantice el uso de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. Ahora, la desigualdad institucional, evidente en el sistema penal acusatorio (el aparato estatal investigativo, por regla general, tiene mayor fortaleza económica, orgánica y funcional, que la defensa a cargo de los particulares), supone la necesaria intervención legislativa para superarla y propiciar la igualdad de trato y de oportunidades de defensa. Por ello, el fortalecimiento y real aplicación de principios procesales tales como la presunción de inocencia, el in dubio pro reo, las prohibiciones de doble incriminación y de autoacusación, entre otros, colocan al juez en una posición clara frente al vacío probatorio: la pasividad probatoria como instrumento de equiparación de armas entre las partes.

PRUEBA DE OFICIO EN PROCESO PENAL-Prohibición del art. 361 de ley 906 de 2004 no es absoluta/**PRUEBA DE OFICIO EN PROCESO PENAL**-Posibilidad de decretarla por juez de control de garantías

La prohibición contenida en el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal no es absoluta, en tanto que los jueces de control de garantías sí pueden decretar y practicar pruebas de oficio en casos en los que sea indispensable para garantizar la eficacia de los derechos que son objeto de control judicial. A esa conclusión se llega después de adelantar el análisis sistemático y teleológico de la norma acusada. Nótese, que no sólo la ubicación de la norma demandada en el contexto normativo significa que la pasividad probatoria del juez está limitada a la etapa del juicio y, especialmente en la audiencia preparatoria, sino también que la ausencia de regulación al respecto en las etapas anteriores al juicio, muestran que la prohibición acusada obedece a la estructura del proceso penal adversarial, según el cual, mientras se ubica en la etapa de contradicción entre las partes, en la fase del proceso en la que se descubre la evidencia física y los elementos materiales probatorios y en aquella que se caracteriza por la dialéctica de la prueba, es lógico, necesario y adecuado que el juez no decrete pruebas de oficio porque rompe los principios de igualdad de armas y neutralidad en el proceso penal acusatorio. No sucede lo mismo, en aquella etapa en la que el juez tiene como única misión garantizar la eficacia de la investigación y la preservación de los derechos y libertades que pueden resultar afectados con el proceso penal.³

Por lo anterior se dirá que en el presente caso, no hay lugar a responsabilidad, toda vez que las actuaciones y decisiones de los agentes judiciales que intervinieron en el proceso penal al que resultó vinculado la demandante, se emitieron en cumplimiento de la ley y la Constitución Política, y la medida de aseguramiento decretada en su contra, se dictó con fundamento en los elementos probatorios, e información legalmente obtenida, exhibida por la fiscalía, razón por la cual, no existe nexo de causalidad entre el daño antijurídico alegado por el demandante y la actuación de la Rama Judicial, máxime cuando fue justamente el Juzgado de conocimiento que declaró la Absolución del hoy demandante en virtud de la cual, el procesado recobro su libertad de manera que no puede deducirse responsabilidad de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por la actuación del juez.

³ CTO LEGISLATIVO 03 DE 2002-Adoptó un sistema de tendencia acusatoria, sin que pueda afirmarse que se trata de un sistema acusatorio puro; SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Características; Referencia: expediente D-6482; Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 361 de la Ley 906 de 2004.; Actor: Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha y otros.; Magistrado Ponente; Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA; Bogotá D. C., veintitrés (23) de mayo de dos mil siete (2007)



De otro lado me permito retomar lo establecido en el artículo 90 de nuestro ordenamiento superior:

El artículo 90 de la Constitución Política consagra la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas”. Se trata de una cláusula general de responsabilidad estatal, cuya estructuración se determina a partir del cumplimiento de dos (2) requisitos:

1. Existencia de un daño antijurídico
2. Que éste sea imputable a la acción u omisión de una autoridad pública.

La noción de daño antijurídico, fue definida por el Consejo de Estado, como aquella lesión patrimonial o extrapatrimonial, causada en forma lícita o ilícita, que el perjudicado no está en el deber jurídico de soportar.

Y EN EL PRESENTE ASUNTO, NO SE HA DEMOSTRADO EL DAÑO ANTIJURIDICO COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL.

El H. Consejo de Estado, Sección Tercera, en la Sentencia del 12 de noviembre de 2014, Exp. 26.441. Consejera Ponente Olga Mélida Calle De La Hoz, dispuso: “esta Sección ha reiterado que al estudiar los procesos de reparación directa es indispensable abordar primeramente, lo relativo a la existencia o no del daño y si el mismo puede o no considerarse antijurídico; solo bajo la premisa de la existencia del daño antijurídico se ha de “realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos título que para el efecto se ha elaborado”

Bajo ese entendido, el daño antijurídico es aquel que afecta un bien jurídicamente tutelado en forma injusta y cuyo titular no tiene la obligación legal o jurídica de soportarlo. Para que sea indemnizable se requiere que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida⁴.

Así pues, para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y debe estar plenamente acreditado, correspondiéndole a quien lo alega la carga probatoria del mismo, al tenor de lo normado en el art. 167 del C.G.P., conforme al cual, la carga de la prueba compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o controvierte, claro está, teniendo en cuenta las particularidades del caso que permitan distribuir dicha carga entre las partes que estén en mejor posición de probar determinada situación.

Por su parte, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia -Ley 270 de 1996 reguló la responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales, por las acciones u omisiones que causen daños antijurídicos, a cuyo efecto determinó tres presupuestos:

- Error jurisdiccional (art. 67)
- Privación injusta de la libertad (art. 68).
- Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (art. 69)

El caso que se analiza se consolidó en vigencia de la Ley 906 de 2004, según la cual el juez con funciones de control de garantías debe velar para que en el proceso se garanticen y protejan los derechos constitucionales del imputado, de tal suerte que, para legalizar la captura, formular la imputación y decretar la medida de aseguramiento de detención preventiva, solicitada previamente por la fiscalía, debe verificar que la misma

⁴ Consejo de Estado, Providencia del 28 de Mayo de 2015, Expediente 31.083, Consejero Ponente JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA.



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

procure el cumplimiento de los fines constitucionales del artículo 250 y cumpla los requisitos del artículo 308 de la citada ley, para imponer medida de aseguramiento, que son:

- “1. Que se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia: (cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación).*
- 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima: (esto es, cuando se evidencie la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales).*
- 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia”.*

En el presente asunto, de las pruebas documentales allegadas a la demanda, se observa que, el Juzgado de Control de Garantías, impartió legalidad a la captura, aceptó la formulación de imputación realizada por la fiscalía, conforme a los artículos 239, 240 inc. final del Código Penal e impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva, solicitada por la fiscalía, conforme a los artículos 313 numeral 2 artículo 308 numerales 2 y 3, en concordancia con los artículos 310 y 312 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 25 de la Ley 1142 de 2007. Por lo cual, las actuaciones del juzgado con función de control de garantías tuvieron respaldo legal en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que exhibió la Fiscalía, en audiencia preliminar.

Se itera que no hay prueba de la responsabilidad a cargo de mi representada pues no ha acreditado la parte actora que las medidas adoptadas hubiesen sido injustas y por ende que le haya generado al actor y directo afectado un daño antijurídico que se le pueda atribuir a la Nación – Rama – DESAJ.

La etapa del juicio oral la avocó el Juzgado Penal del Circuito, en virtud de la acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación contra el hoy demandante, como autor material del delito de **“HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS O PARTES O MUNICIONES”**, etapa que se surtió conforme a los artículos 337 al 445 de la Ley 906 de 2004.

De acuerdo con los documentos anexos a la demanda, el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, absolvió al demandante y directo afectado, la teoría presentada por la Fiscalía al inicio del juicio oral, no encontró respaldo en las pruebas legalmente recaudadas y arrojadas al proceso, de las cuales, no se obtuvo certeza suficiente para impartir condena, conforme con lo establecido en la Ley 906 de 2004.

En resumen, el juez con funciones de control de garantías que actuó durante el proceso penal, cumplió las funciones que le asigna la Ley 906 de 2004, las audiencias por él dirigidas fueron audiencias preliminares, en las cuales, no se discute la responsabilidad penal del imputado, por cuanto el juez con funciones de control de garantías, trabaja con elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, elementos que no constituyen plena prueba y por ende, no son suficientes para discutir la responsabilidad; la definición de la responsabilidad penal compete al juez de conocimiento, quien al valorar las pruebas, comprobó que éstas no desvirtuaron la presunción de inocencia que cobijaba al hoy demandante y por ende, emitió sentencia absolutoria a su favor, es decir fue precisamente la actuación del **Juzgado Penal del**



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Circuito con Funciones de Conocimiento al absolver al demandante, la que determinó que cesara cualquier consecuencia legal negativa para el mismo.

En virtud de lo expuesto, **REITERO NO EXISTE NEXO DE CAUSALIDAD** entre las actuaciones y decisiones de los jueces penales que intervinieron en el proceso y el daño antijurídico deprecado por el extremo activo de esta controversia jurídica.

Además lo que se desprende de la demanda impetrada, es que en el sub examine, **Se Cumplió Con La Finalidad De Las Instancias** cual es, la fiscalía de adelantar la investigación y posterior acusación con base en el material probatorio arrimado al expediente y la del Juzgado de Conocimiento de adelantar la etapa del Juicio, finalidad creada por el Legislador como una garantía para el procesado sin que tal decisión legitime al demandante para reclamar, la Indemnización Patrimonial que consagra el Art. 90 de la Constitución Política, pilar de la Reparación Directa,

➤ **A FIN DE AHONDAR EN LA COMPETENCIA DADA A LA NACIÓN RAMA JUDICIAL A TRAVÉS DE LA ACTUACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, CABE MANIFESTAR LO SIGUIENTE:**

Tal como lo enseña la jurisprudencia constitucional, el sistema penal acusatorio conserva como etapas de procedimiento la indagación, la investigación y el juicio oral, y en el nuevo esquema procesal penal colombiano la figura del juez de control de garantías reviste capital importancia, pues a dicho funcionario le está asignado el control, formal y material, de esos actos de investigación, valga decir, la actividad desplegada por la Fiscalía en ejercicio de su atribución de persecución penal.

En nuestro sistema procesal penal se le confirió a la Fiscalía General de la Nación el monopolio de la persecución penal en cuanto la facultó para dirigir y coordinar la investigación criminal, y adoptar medidas restrictivas de garantías fundamentales como los derechos a la libertad, a la intimidad y a la propiedad; también previó que en estos eventos la actividad fiscal estuviera sometida a control judicial, para lo cual introdujo como innovación la figura del Juez de Control de Garantías, a cuyo cargo está examinar si las atribuciones judiciales ejercidas por la Fiscalía se adecuan o no a sus fundamentos constitucionales, primordialmente, si en su desarrollo se han respetado las libertades públicas ciudadanas, tal como se explicó en la correspondiente exposición de motivos cuando se señaló por parte de la célula pertinente del Congreso:

“De cara al nuevo sistema no podría tolerarse que la Fiscalía, a la cual se confiere el monopolio de la persecución penal y por ende, con amplios poderes para dirigir y coordinar la investigación criminal, pueda al mismo tiempo restringir, por iniciativa propia, derechos fundamentales de los ciudadanos o adoptar decisiones en torno de la responsabilidad de los presuntos infractores de la ley penal, pues con ello se convertiría en árbitro de sus propios actos.

“Por ello, en el proyecto se instituye un conjunto de actuaciones que la Fiscalía debe someter a autorización judicial previa o a revisión posterior, con el fin de establecer límites y controles al ejercicio del monopolio de la persecución penal, mecanismos estos previstos de manera escalonada a lo largo de la actuación y encomendados a los jueces de control de garantías.”

“Función deferida a los jueces penales municipales, quienes apoyados en las reglas jurídicas hermenéuticas deberán establecer la proporcionalidad, razonabilidad, y necesidad de las medidas restrictivas de los derechos fundamentales solicitadas por la Fiscalía, o evaluar la legalidad de las actuaciones objeto de control posterior.”



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

“El juez de control de garantías determinará, particularmente, la legalidad de las capturas en flagrancia, las realizadas por la Fiscalía de manera excepcional en los casos previstos por la ley, sin previa orden judicial y, en especial, tendrá la facultad de decidir sobre la imposición de las medidas de aseguramiento que demande la Fiscalía, cuando de los elementos materiales probatorios o de la información obtenida a través de las pesquisas, aparezcan fundados motivos para inferir que la persona es autora o partícipe de la conducta que se indaga.”

“De otra parte, armonizando la naturaleza de las medidas de aseguramiento con la filosofía que inspira el sistema acusatorio y acorde con la jurisprudencia constitucional, sobre la materia, su imposición queda supeditada a unos fines que justifican la restricción del derecho fundamental a la libertad. En consecuencia, no bastará con evidencias de las cuales se pueda inferir la autoría o participación en la comisión de un delito, sino que se torna indispensable que la privación de la libertad devenga necesaria en razón del pronóstico positivo que se elabore, a partir de tres premisas básicas: que el imputado estando en libertad pueda obstruir el curso de las investigaciones; que pueda darse la fuga; o que, por la naturaleza del hecho investigado, constituya un peligro para la sociedad o las víctimas del delito.”⁵

Valga decir, al Juez de Control de Garantías le corresponde establecer, tal como lo enseña la jurisprudencia constitucional, si determinada medida de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales practicada por la Fiscalía General de la Nación se adecua a la ley, y si es proporcionada, en cuanto contribuya a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; si es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin; y si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad.⁶

En ese contexto, al funcionario judicial en mención le compete ejercer:

- Un control sobre la aplicación del principio de oportunidad.
- Un control *posterior* sobre las capturas realizadas por la Fiscalía General de la Nación.
- Un control *posterior* sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de llamadas.
- Un control *previo* para la adopción de medidas restrictivas de la libertad.
- Decretar medidas cautelares sobre bienes.
- Autorizar cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales y que no tenga una autorización expresa en la Constitución.

En ejercicio de esa competencia, los efectos de la decisión que adopte el juez de garantías bien puede acarrear las siguientes consecuencias:

“Si encuentra que la Fiscalía ha vulnerado los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, el juez a cargo del control no legitima la actuación de aquella y, lo que es más importante, los elementos de prueba recaudados se reputan inexistentes y no podrán ser luego admitidos como prueba, ni mucho menos valorados como tal. En consecuencia, no se podrá, a partir de esa actuación, llevar a cabo la promoción de una investigación penal, como tampoco podrá ser llevada ante el juez de conocimiento para efectos de la promoción de un juzgamiento; efectos éstos armónicos con la previsión del artículo 29 superior, conforme al cual es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación del debido proceso.”

⁵ Exposición de motivos del Acto Legislativo 237 de 2002 – Cámara (Actual Acto Legislativo 02 de 2003). Gaceta del Congreso # 134 del 26 de abril de 2002.

⁶ Corte Constitucional, Sentencia C-591 de 9 de junio de 2005.



“Por el contrario, si el juez de control de garantías advierte que la Fiscalía, en ejercicio de esas facultades, no ha desconocido los límites superiores de su actuación, convalida esa gestión y el ente investigador podrá entonces continuar con su labor investigativa, formular una imputación, plantear una acusación y pretender la condena del procesado.”
(SUBRAYA FUERA DE TEXTO)

FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN

La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el Juez de Control de Garantías. En Audiencia Pública y ante Juez de Control de Garantías, el Fiscal, al encontrar que una persona puede ser autor o participe de un delito, hará la correspondiente formulación de la imputación delictiva.

Esta etapa por regla general es de tipo administrativo y no involucra la judicialización de acto alguno, excepto la intervención del Juez de control de garantías para aquellos eventos en la Fiscalía interfiere derechos fundamentales del imputado, pero en cualquier caso durante esta etapa no existe prueba ni contradicción de la misma, excepto que se trate de las hipótesis excepcionales de prueba anticipada.

El Fiscal es el director y coordinador de esta etapa pre procesal y controla jurídicamente la labor investigativa de la Policía Judicial, al punto que puede durante la etapa de indagación o durante la investigación, suspender, interrumpir y renunciar a la acción penal, en desarrollo de otro de los principios capitales del modelo acusatorio, cual es el del **principio de oportunidad**.

La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones:

1. Ordenar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, y poner a disposición del juez de control de garantías los elementos recogidos, para su control de legalidad dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
2. Ordenar capturas, de manera excepcional y en los casos previstos en este código, y poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

La investigación penal está a cargo de la Fiscalía general de la Nación en colaboración necesaria de la POLICÍA JUDICIAL, estos últimos son entidades del estado que apoyan la investigación. Realizan actividades de verificación, información sin que estas actuaciones se constituyan en pruebas, lo recolectado por la policía judicial tiene la calidad de Evidencias. En caso de flagrancia su actuación será Oficiosa y en la primera hora hábil siguiente informaran en detalle al Fiscal.

La figura del Juez aparece con una doble connotación. Son dos los jueces que actúan en este proceso de tendencia acusatoria. De un lado, está **EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS** que es quien hace el control de legalidad sobre las actuaciones de la Fiscalía, adopta las medidas de aseguramiento, decide sobre las facultades extraordinarias de la Fiscalía. Del otro lado, al final del proceso, en el juicio Oral, está **EL JUEZ DE CONOCIMIENTO**, quien recibe la acusación de parte de la Fiscalía y ordena y da valor a las pruebas y juzga, ya sea que profiera sentencia condenatoria o absuelva.

El Juez a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información legalmente aportada pueda considerar que existe autoría coautoría o participación de la conducta delictiva que se investiga.

La función del Juez de Control de Garantías, según la filosofía procesal, es controlar al estado en el ejercicio del poder punitivo. El estado, por disposición constitucional al servicio del individuo y por ello debe ser garante de la dignidad humana y los derechos fundamentales. El poder del estado no es absoluto y por ello debe ser controlado. Normalmente es el fiscal quien solicita la audiencia para control de garantías pero también puede hacerlo la defensa, el indiciado, la víctima; Los Objetivos de la Audiencia Preliminar son fundamentalmente Legalizar la captura, hacer la correspondiente imputación y solicitar e imponer la respectiva medida de aseguramiento, además legalizar los allanamientos y registros en control posterior. Art. 154 Código de Procedimiento Penal. No se resuelven en audiencias preliminares los asuntos propios del juicio oral.

Al Juez de Control de Garantías en la audiencia de legalización de captura, se le debe demostrar que no se ha violado ningún requisito legal o disposición procesal: tal es el caso de que se realizó acta de derechos del capturado y que esta contiene todos los legalismos requeridos:

- 1) que los derechos efectivamente se dieron a conocer en el momento de la aprehensión,
- 2) que los derechos expuestos al capturado se le hicieron efectivos. Por ejemplo, que se le permitió la llamada a que tiene derecho de informar a alguien de su captura.
- 3) en el acta deben constar todas las actuaciones y anexar constancia de buen trato y constara hora de inicio y de finalización de la disposición física y jurídica.

Al capturado se le informará de manera inmediata lo siguiente:

1. Del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó.
2. Del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que este indique.
3. Del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.
4. Del derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el sistema nacional de defensoría pública proveerá su defensa.

Una vez efectuado el control por el Juez de Garantías de aquellas actividades que lo requieran, realizadas las diligencias trazadas, el Fiscal puede entonces formalizar la investigación a partir de la formulación de la imputación, diligencia que se lleva a cabo también en Audiencia Preliminar y que consiste en el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, para garantizarle a plenitud su derecho de defensa, cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que es autor o partícipe del delito que se investiga.

Como es sabido, el Honorable Consejo de Estado en diversas oportunidades ha manifestado que para endilgar responsabilidad administrativa patrimonial a una entidad del Estado es necesaria la demostración, a través de medios de prueba idóneos allegados al proceso legal y en forma oportuna, la existencia de una falla en el servicio, del daño y



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

del nexo causal entre los dos anteriores; carga que corresponde a la parte actora conforme a lo previsto en el artículo 167 del C.G.P.: *"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen."*

Por tanto, no es atribuible endilgar responsabilidad a la Nación Rama Judicial, cuando el actuar del Juez de control de garantías se enmarco dentro de la Ley, y por otra parte se dio absolución por el Juicioso análisis de las pruebas dado por el Juez de Conocimiento el cual determino la absolución.

Ahora bien, se itera que las actuaciones de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no deben ser asumidas por mi representada, es preciso tener en cuenta lo siguiente:

"Como se deduce hasta el momento queda claro que la responsabilidad predicada en la demanda la encuentra acreditada la Sala frente a la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, pero no se condenará a la Rama Judicial en virtud a que esta sólo actuó en representación de la Fiscalía y esta última goza de autonomía presupuestal de conformidad con el artículo 28 de la Ley 270 de 1996.

Se excluye a la Rama Judicial de responsabilidad en virtud del artículo 249 infine de la Constitución Política, el cual indica:

"...

La Fiscalía forma parte de la Rama Judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal. " (Subrayado de la Sala).

De la lectura de la norma superior y del artículo 28 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se desprende a todas luces, que la Rama Judicial representada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, queda relevada frente a las pretensiones de la demanda, pues no es sujeto pasivo de la acción, por ser precisamente la Fiscalía General de la Nación un ente autónomo, que posee personería jurídica, autonomía y patrimonio independiente, lo cual le permite responder con su propio peculio por las condenas que le sean impuestas; además, la actuación cuestionada es exclusiva de la Fiscalía. Queda pues eximida de responsabilidad alguna la Rama Judicial." Subrayas propias (Sentencia Marzo 30 de 2004 Tribunal Administrativo de Cundinamarca Exp.2002-00135 Demandante Jorge López Cardona. M. P. Jaime Rafael Fajardo.)

RETOMANDO LA NORMATIVIDAD CIVIL, se tiene:

ARTÍCULO 1721.- Factores de atribución. La atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa.

En el presente asunto, es claro que existe un equívoco de la parte actora, en cuanto a la atribución del daño, pues brilla al ojo el factor objetivo donde se advierte que la investigación no empieza ni por la entidad que represento ni con sus actuaciones, de igual manera, la medida restrictiva de la libertad no es una decisión que adopte la NACIÓN RAMA JUDICIAL – DESAJ sin que medie solicitud del ente investigador y sin que existan elementos, indicios, que dirijan al juez a la adopción de la medida, es claro que está plenamente acreditada la necesidad de la imposición de la medida, y que la misma cumplió con los criterios de **Razonabilidad, Proporcionalidad** (Ver sentencia Corte Constitucional. C-070 y C-118 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-205 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y **Ponderación**.



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

ARTÍCULO 1722.- Factor objetivo. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario.

Concomitante con lo anterior, en sus inicios, sin que en esa etapa sea verificable de fondo, de existir alguna culpa por parte de mi representada (Y no se encuentra probada en el expediente), es preciso analizar su señoría, que existió en la etapa inicial denuncia de un tercero y falencias en la etapa previa de la investigación, ello exonera a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DESAJ, pues no solo hay normativa que la obligaba a la imposición de la medida de aseguramiento por la naturaleza el delito investigado, sino que existió un hecho ajeno que puso en marcha el aparato judicial, tornándose tal decisión del Juzgador, en irresistible, pues frente a una normativa vigente, no puede sustraerse al cumplimiento de tal obligación, pues se tratan de derechos de menores, los cuales prevalecen.

ARTÍCULO 1723.- Responsabilidad objetiva. Cuando de las circunstancias de la obligación, o de lo convenido por las partes, surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva.

Termina configurándose la responsabilidad objetiva del ente investigador por cuanto de conformidad con la ley, se espera obtener de dicha entidad, un resultado determinado y para la cual fue creada y al no cumplir su cometido, su responsabilidad se torna en objetiva, pues sus falencias en la etapa de instrucción, no pueden trasladarse por conexidad, a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL- DESAJ.

S resalta que la parte actora no ha probado la producción de daño antijurídico alguno que sea atribuible a la Nación – Rama Judicial- DESAJ.

Deberá tenerse en cuenta que la parte actora ha omitido referirse en su escrito de demanda, a los hechos acontecidos en el proceso penal, pues sólo alude a ellos a partir de la FORMULACION DE CARGOS Y LA SOLICITUD DE LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, por lo que es pertinente remitirse a las circunstancias del caso, las cuales son pertinentes y conducentes en el caso que nos ocupa.

Se insiste en que es preciso tener en cuenta que de la demanda y sus anexos no se logra acreditar que el presunto daño alegado por la parte actora sea atribuible a mi mandante y no se prueba que el mismo sea antijurídico en relación las actuaciones que realizaron los juzgadores de la Nación – Rama judicial, en el proceso penal.

Reitero la petición de absolver de toda responsabilidad administrativa a la entidad que en esta oportunidad represento y en los anteriores términos doy por CONTESTADA la presente demanda en espera de que su señoría profiera sentencia en los términos que aquí han sido solicitados.

Finalmente es preciso tener en cuenta los fallos de la H. Corte Constitucional (Sentencia SU-072 del 5 de Julio de 2018); y del H. Consejo de Estado (Sentencia del 15 de agosto de 2018 - Expediente N° 46.947), que UNIFICÓ la jurisprudencia en los casos de privación de la libertad.

PRUEBAS



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Ténganse por su valor probatorio, las legal y oportunamente allegadas al expediente, relacionadas con el proceso penal y las que su señoría considere pertinentes y se decreten las siguientes:

-Solicito muy respetuosamente, que se oficie al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”, para que CERTIFIQUE respecto del demandante privado de la libertad y directo afectado y con la finalidad de constatar causales adicionales eximentes de responsabilidad en favor de mi representada, lo siguiente:

- a). En qué ocasiones ha sido recluso en establecimiento carcelario
- b). Por qué autoridades u órdenes judiciales ha sido requerido
- c). Por cuánto tiempo ha sido recluso en establecimiento carcelario
- d). Qué personas visitaron al señor YEISON ANDRÉS HINCAPIÉ NOGUERA durante el tiempo que estuvo privado de la libertad.

EXCEPCIONES

1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA:

COMO EXCEPCION PREVIA: Teniendo en cuenta la aceptación del hecho y circunstancia señalada por la parte actora en el hecho 10 de la demanda, quien de manera expresa señala que el perjuicio que reclama obedece a una entidad estatal específica, lo cual debe tenerse como una confesión expresa y que da lugar a que se desvincule a mi representada en virtud de los principios de Economía y Celeridad.

COMO EXCEPCIÓN DE MÉRITO: Porque si bien es cierto, según el inciso tercero (3º) del artículo 249 de la Constitución Nacional, la Fiscalía General de la Nación forma parte de la Rama Judicial, también lo es que la dotó de autonomía administrativa y presupuestal; pero, además, desde el punto de vista procesal Administrativo, el artículo 149, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 49 de la ley 446 de 1998 estableció, que en los procesos contencioso administrativos, la Nación – Fiscalía General de la Nación, estará representada por el Fiscal General y la Rama Judicial por el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

En este contexto, se presenta ausencia de nexo causal, pues no hay lugar a discusión conforme a la redacción del artículo 332, ya que la facultad para pedir la preclusión de la investigación, está deferida por ley, de manera exclusiva y excluyente, a la Fiscalía (la norma reza: “*El fiscal solicitará la preclusión*”); motivo por el cual, no podía iniciarse, ni mantenerse una investigación sobre la cual, no existían elementos materiales de prueba que comprometieran la responsabilidad del imputado; por ausencia de mérito para sostener una acusación, siendo así no existe responsabilidad de mi defendida y deberá declararse la Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva y eximir de toda responsabilidad a la entidad que represento.

Además, como se explicó con anterioridad al momento de legalizar la captura del actor, el Juez de Control de Garantías no tiene la facultad de hacer juicios de responsabilidad penal, sino de verificar que los procedimientos se hayan cumplido, lo cual ocurrió en el presente asunto, además de existir indicios de responsabilidad.



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Finalmente, consideramos que de la demanda y sus anexos, no obra prueba en contra de la NACIÓN RAMA DESAJ, pues no se encuentra acreditado en el expediente la concurrencia de los siguientes elementos para que se pueda endilgar responsabilidad a mi mandante, a saber:

i) una conducta humana, positiva o negativa, antijurídica, ii) un daño o perjuicio, esto es, un detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva, iii) una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación y, iv) un factor o criterio de atribución de la responsabilidad, por regla general de carácter subjetivo (dolo o culpa) y excepcionalmente de naturaleza objetiva.

Razones estas son las que nos lleva a solicitar y deferir al momento de la sentencia, la declaratoria de prosperidad de este medio exceptivo que ha sido propuesto.

1.1 FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, en relación con la presunta compañera permanente del señor YEISON ANDRÉS HINCAPIE NOGUERA, pues comparece al proceso sin la acreditación de su calidad tal y como lo prescribe nuestro ordenamiento jurídico vigente.

2. **CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA EN LA PRODUCCIÓN DEL HECHO DAÑOSO**: Es preciso su señoría, tener en cuenta o analizar las condiciones de vida del hoy demandante y directo afectado, y las razones primigenias que conllevan al ente Instructor a optar por la captura y posterior solicitud de legalización de la misma y con ello la solicitud de imposición de la mediada de aseguramiento, donde se advierte que la exposición al daño reclamado a través del presente medio de control; razones estas que fundarían la configuración de eximentes de responsabilidad para el extremo pasivo de esta relación jurídico procesal que conlleven a que sean nugatorias las pretensiones de la demanda.

Lo anterior conforme a la sentencia del 30/04/2014 emanada del Honorable Consejo de Estado – **C.P. DANILO ROJAS BETANCOURTH, Rad 25000-23-26-000-2001-01145-01(27414) Actor PEDRO ARMANDO ORTEGON CUFÍÑO - Demandado: LA NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL.**

3. **La innominada o genérica** o cualquier otra que el fallador encuentre probada Art.187 C.P.A.C.A. y teniendo en cuenta que no fue allegado el expediente penal que permita advertir la existencia de otros eximentes de responsabilidad en favor de mi representada.

PETICIONES

Que se declare la prosperidad de las excepciones que se proponen en esta contestación y/o las que de conformidad con lo estipulado en el artículo lo 187 inciso 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resultaren probadas aunque no se hayan alegado o solicitado.



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Que se nieguen todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte actora en contra de mi mandante Nación - Rama Judicial – DESAJ; es decir, sea absuelta de toda responsabilidad administrativa y patrimonial.

Y que, en una eventual condena, sin que ello signifique aceptación de los supuestos de hecho y de prueba en contra, mi representada no sea condenada en costas.

ANEXOS

1. Poder otorgado al suscrito por la señora Directora Seccional de Administración Judicial, doctora CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA.
2. Resolución No. 1357 del 01 de febrero de 2007, del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa "Por medio del cual se hace un nombramiento".
3. Acta de Posesión del primer (1º) día del mes de febrero de 2007.
4. Fotocopia Cédula de Ciudadanía No.31.962.322.
5. Certificación, expedida por el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

NOTIFICACIONES

Las recibiré en la secretaria en la Carrera 10 No.12-15 Piso 17 Torre B Palacio de Justicia Pedro Elías serrano Abadía.

Correo electrónico: dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

De manera comedida solicito a su señoría, autorice que me sean comunicadas las providencias que se profieran en el curso de este proceso a mi dirección de correo electrónico: galdesajvalle4@cendoj.ramajudicial.gov.co

Atentamente,

NANCY MAGALI MORENO CABEZAS.

C.C. No. 34.569.793 expedida en Popayán (C.)

T.P. No. 213.094 del C. S. de la Judicatura.



DESAJCLO21-1768
Santiago de Cali, 11 de junio de 2021

Señores
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO.
Cali – Valle del Cauca

Asunto: MEMORIAL PODER
Radicación: 76001-3333-001-2021-00029-00
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Demandantes: YEISON ANDRÉS HINCAPIE NOGUERA Y

OTROS.

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y
NACIÓN F.G.N.

CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA, mayor de edad, con domicilio en Santiago de Cali (Valle), identificada con cédula de ciudadanía No. 31.962.322 de Cali - Valle, en mi calidad de representante legal de la Nación – Rama Judicial, como Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca, nombrada mediante Resolución Nro. 1357 del 01 de febrero del año 2007 emanada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y Posesionada mediante Acta del 1º de febrero de 2007, de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley 270 de 1996, artículo 103 numeral 7; confiero poder especial, amplio y suficiente, a **NANCY MAGALI MORENO CABEZAS**, Abogada de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, con Cédula de Ciudadanía No. 34.569.793 de Popayán (Cauca) y Tarjeta Profesional de Abogada No. 213.094 del Consejo Superior de la Judicatura, para que asuma la representación y defensa de la Nación – Rama Judicial en el proceso del asunto. La dirección de correo electrónico de la apoderada es galdesajvalle4@cendoj.ramajudicial.gov.co, misma que se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Abogados.

La apoderada queda facultada para desistir, sustituir, conciliar en todas las etapas administrativas y judiciales, así como realizar todo cuanto sea necesario para cumplir debidamente este mandato, exceptuando únicamente la facultad de recibir.

Finalmente se recuerda, que la **ÚNICA** dirección electrónica para efectos de notificación a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), es dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Sírvase reconocer personería a la apoderada,

CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA
C. C. No. 31.962.322 de Cali (V.)
Directora Ejecutiva Seccional.

ACEPTO:

NANCY MAGALI MORENO CABEZAS
C. C. No. 34.569.793 de Popayán (Cauca)
T. P. 213.094 del C. S. de la Judicatura.
Cel. 3164900473



46

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ACTA DE POSESION

En la ciudad de Bogotá, D. C., el 1º. de febrero de 2007, se presentó al Despacho del Director Ejecutivo de Administración Judicial la doctora CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.962.322 de Cali, con el fin de tomar posesión del cargo de Director Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle, a partir del 1º. de febrero de 2007.

Prestó el juramento de rigor ordenado por la Constitución y la Ley.

EL DIRECTOR EJECUTIVO



JUAN CARLOS YEPES ALZATE

LA POSESIONADA



CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA

ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL
DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL

Octubre 10 de 2011

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
31,962.322

APELLIDOS
RAMIREZ SIERRA

NOMBRES
CLARA INES



[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-ENE-1967

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

B-

ESTATURA

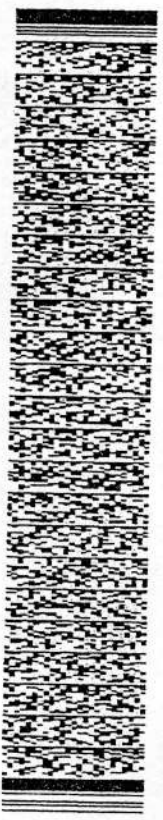
G.S. RH

SEXO
F

30-AGO-1985 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
ALMABENRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500130-70144942-F-0031962322-20060105

0007306005H 01 192117564



*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial*

2721
2715
2713

RESOLUCIÓN No. 1357 -1 FEB 2007

Por medio de la cual se hace un nombramiento

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION JUDICIAL
*En ejercicio de sus facultades legales estatutarias, especialmente las conferidas
en el artículo 99, numeral 5 de la Ley 270 de 1.996,*

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar a la doctora CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía 31.962.322 de Cali, en el cargo de Director Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle, a partir del 1º. de febrero de 2007.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C.

-1 FEB 2007

JUAN CARLOS VEPES ALZATE

Claudia G.

Calle 72 No. 7-96 –www.ramajudicial.gov.co

ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL
DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL

Octubre 10 de 2011



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION JUDICIAL

CERTIFICA QUE:

De conformidad con lo establecido en el artículo 103 numeral 7 de la Ley 270 de 1996, corresponde a los Directores Seccionales de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, entre otras funciones, representar a la Nación - Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales.

Es así como el Director Ejecutivo ha impartido a la Directora Seccional de Administración Judicial de Cali, las instrucciones pertinentes para el ejercicio de dicha función legal, encontrándose en consecuencia debidamente autorizada, orientada y dirigida por esta Dirección.

Esta certificación se expide en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de diciembre de dos mil nueve (2.009) con destino a los despachos judiciales del Distrito Judicial Cali - Valle del Cauca.

C/0-74
CARLOS ARIEL USEDA GOMEZ
Director Ejecutivo de Administración Judicial

AJND/DEV/AM/110



Die 3/09
MUJSC